

CONFLICTOS AGRARIOS Y LUCHAS ARMADAS EN LA COLOMBIA CONTEMPORÁNEA: UNA VISION GEOGRAFICA*

Alejandro Reyes Posada
Ana María Bejarano**

PRESENTACION

No son pocas las interpretaciones que ligán en forma estrecha y casi automática la violencia que sacude actualmente al país con la persistencia de profundos conflictos sociales sin resolver. El presente estudio no pretende dar una respuesta definitiva sobre la veracidad de tales interpretaciones. Más bien busca abrir de nuevo el debate alrededor de una pregunta que hasta ahora no ha sido resuelta en forma satisfactoria: ¿cuál es la relación entre los conflictos sociales y la acción armada? La pregunta implica otras: ¿en qué grado la falta de resolución de los conflictos por medios institucionales incide en la generación de acciones violentas? Y también: ¿contribuyen las luchas armadas a resolver los conflictos mediante cambios en la legalidad realmente vigente para su tramitación?

Una primera aproximación a estas preguntas es la descripción de los principales conflictos sociales, que en este estudio se circunscriben a

los agrarios y los conexos con éstos, para contrastar las regiones donde se libran con las regiones donde ocurren las operaciones armadas de las guerrillas.

En una visión de síntesis, hay una especialización regional de los grupos guerrilleros. Ei de mayor cubrimiento geográfico son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que ocupa las principales áreas de colonización campesina (piedemonte oriental, Magdalena Medio, Alto Magdalena) y algunas áreas d^ conflictos entre grandes y pequeños agricultores en la región suroccid^ntal.

Le sigue el Ejército de Liberación Nacional — ELN— que ocupa buena parte de la región nororiental, a lo largo de la frontera con Venezuela, y la región oriental de Antioquia. El Ejército Popular de Liberación — EPL - es característico de las regiones bajo influencia antioqueña como Urabá, Córdoba, la zona cafetera y el mismo departamento de Antioquia. Tiene una presencia limitada en Norte de Santander y el Putumayo, dentro de una estrategia fronteriza con Venezuela y Ecuador. El Movimiento 19 de Abril —M-19— reduce sus áreas de operaciones rurales a la región suroccidental del país: Valle, Cauca y Tolima.

El artículo comienza con algunas precisiones sobre la relación entre conflictos sociales y ac-

* Este trabajo forma parte de una investigación más amplia sobre geografía de la violencia contemporánea en Colombia. Una primera entrega se publicó en Análisis Político No. 2 con el título "La violencia y el problema agrario en Colombia".

** Alejandro Reyes, Sociólogo; Ana María Bejarano, Politóloga; investigadores del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.

ciones guerrilleras y pasa luego a describir las mismas dimensiones en las seis principales regiones de violencia del país, detallando en cada una las subregiones donde ha habido acciones guerrilleras en los últimos tres años.

MOVIMIENTOS SOCIALES O ACCION ARMADA: UN DILEMA PARA LOS ADVERSARIOS EN CONFLICTO

El avance paralelo de los índices de crecimiento económico y de conflictos violentos en Colombia durante los años ochentas señala el carácter desequilibrado de un modelo de desarrollo que tiende a desestimar los intereses populares en favor de la acumulación de la riqueza. Los conflictos son señales que indican que se ha pasado el umbral de aceptación de sacrificios sociales por parte de grupos populares. Su solución exige corregir el rumbo del crecimiento económico para atender las demandas sociales de la población. Este estudio considera en forma principal los conflictos agrarios, que se asocian de manera global a la geografía de la violencia.

Los principales conflictos agrarios son aquellos que se libran en las áreas de colonización, entre campesinos y nuevos latifundios: los que existen entre propietarios y campesinos sin tierra en las áreas de latifundio tradicional: entre trabajadores y empresarios agrícolas; entre comunidades indígenas con colonos y hacendados; y entre las empresas mineras, petroleras y eléctricas y los pobladores locales. Los desequilibrios regionales y la destrucción social que resultan de los conflictos agrarios provocan éxodos de población a los centros urbanos. Las demandas sociales originadas en estos flujos de migración superan la capacidad de las ciudades para atenderlas.

La tendencia hacia formas violentas de resolución de los conflictos aumenta cuando los adversarios no pueden organizarse como movimientos sociales (1), o cuando uno de ellos lo-

gra organizarse y ejerce violencia contra el otro polo, todavía disperso, con el fin de impedir su constitución como movimiento social, lo cual, a su vez, impide la estructuración del conflicto mismo. La peor situación es la de conflictos difusos (mal articulados o mezclados) alrededor de los cuales surgen y se reproducen formas de violencia también difusas y generalmente estériles. Los movimientos sociales luchan por influir el sistema político, que constituye una instancia de mediación en los conflictos. La violencia también está asociada a la incapacidad del sistema político para cumplir esta tarea. Cuando fracasa la mediación política los movimientos sociales pueden derivar hacia un enfrentamiento directo entre los adversarios sociales.

La historia de las luchas campesinas en Colombia durante los años setenta ilumina lo anterior. El conflicto central que libró el movimiento de la ANUC fue la lucha de los campesinos sin tierras contra los latifundios ganaderos, especialmente en la Costa Atlántica, el Tolima, el Huila y los Llanos Orientales. La ANUC incorporó además las aspiraciones de los minifundistas, de las comunidades indígenas, de los colonos y de los jornaleros agrícolas. Esta multiplicidad de conflictos campesinos, así como las luchas de poder de los grupos políticos de izquierda dentro de la ANUC contribuyeron, entre otros factores, a su debilitamiento. En estas circunstancias, el viraje contrarreformista del gobierno conservador de Pastrana Borrero logró dividir el movimiento campesino. La represión directa, sumada a la parálisis de la reforma agraria terminó por desarticularlo a mediados de la década de los años setenta (2).

La ausencia de movimientos sociales vigorosos que promuevan los objetivos de la colonización, de las comunidades indígenas, de los trabajadores rurales y de la economía campesina minifundista, contribuye a explicar que las guerrillas hayan ocupado los espacios políticos correspondientes a los grupos mencionados. Si en la década de los años setenta el movimiento campesino ocupó el escenario rural, en los ochenta lo han ocupado los grupos guerrilleros.

1. Alain Touraine ha desarrollado una teoría para el estudio de los movimientos sociales, que los coloca en el centro de los cambios históricos. Puede consultarse su libro *The Voice and The Eye. An analysis of social movements*, Westfordt, Maison de Sciences de l'Homme and the Cambridge University Press, 1981.

2. León Zamosc, *La cuestión agraria y el movimiento campesino en Colombia. Luchas de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) 1967-1981*, Bogotá, UNRISD-CINEP, 1987.

En los últimos años, la situación de los campesinos y sus adversarios en cada conflicto ha sido alterada en algunas regiones por la acción de narcotraficantes. Estos han superado la acumulación inicial de capital y han entrado a formar parte de los grandes propietarios e inversionistas rurales. Este nuevo actor ha trasladado la organización propia del negocio a la del conflicto, reforzando la tendencia tradicional de los propietarios a ejercer violencia contra los campesinos.

No obstante el panorama anterior, tampoco podría decirse que, en Colombia, todos los conflictos sociales se han transformado en conflictos armados. Esta afirmación sólo podría ser aplicada a los conflictos que se desarrollan en algunas regiones del país. Por otro lado, es preciso aclarar que no todos los conflictos armados expresan abiertamente o mantienen una estrecha relación con conflictos sociales. Muchos de ellos se desenvuelven gracias a la dinámica militar propia de los protagonistas enfrentados, cuando ya ellos han perdido la relación original con los grupos sociales a los cuales, en algún momento, buscaron representar.

La tendencia creciente en el país, a pesar del auge de las luchas guerrilleras, es un desplazamiento del conflicto entre guerrillas y Fuerzas Armadas hacia un conflicto más complejo entre aparatos armados y grupos populares. Entre los aparatos armados se cuentan, además de las Fuerzas Armadas y los frentes guerrilleros, más de 140 grupos paramilitares, numerosos grupos de autodefensa y escoltas privadas (3).

Todos estos aparatos de fuerza buscan vincular a su acción a grupos populares e identifican como enemigos a los grupos que sirven de apoyo real o potencial a los adversarios o que residen en su territorio. Como efecto de esta complejidad de los conflictos armados, aparece una tendencia a la lucha horizontal entre bases populares partidarias de uno u otro aparato armado. La política de las Fuerzas Armadas de impulsar la organización de autodefensas cam-

pesinas refuerza esta tendencia. A su vez, tal enfrentamiento intracase tiene un efecto nocivo para la resolución del conflicto ya que impide la organización del polo popular como movimiento social. Pero, además, la creación y promoción de grupos de autodefensa y afines lleva implícita la propensión a la delincuencia y el bandolerismo, como ha comenzado a ocurrir en el caso de Puerto Boyacá.

Sin embargo, la guerrilla continúa siendo un actor fundamental para el proceso político nacional y para el conflicto armado en particular. Aceptando que, tanto por su dinámica interna como por sus acciones, sus métodos y sus objetivos, los grupos guerrilleros se diferencian de los movimientos sociales, no se debe desconocer tampoco que entre ellos existen varias líneas de relación e influencia mutuas. Por un lado, dada la amplitud del cubrimiento geográfico que ha alcanzado la lucha guerrillera en Colombia, es posible afirmar que, en algunas regiones y en ciertos momentos, aparece a los ojos de los sectores populares en conflicto como una opción real de lucha favorable a sus intereses; por otro lado, el costo que deben pagar los sectores populares por esta opción es la creciente criminalización de las luchas reivindicativas por sus adversarios y la subordinación de los movimientos sociales a la lógica guerrillera.

Esta ocasional conexión entre guerrilla y sectores populares organizados ha inducido, por otra parte, a las clases dominantes a utilizar una doble estrategia. En primer lugar, algunos sectores se sienten inclinados por la vía del reformismo social, la negociación y las concesiones, buscando cooptar a los sectores populares en conflicto. En segundo término, otros grupos dominantes responden a los posibles vínculos entre guerrillas y grupos populares con el apoyo a las políticas de represión estatal o con el ejercicio de violencias por mano propia.

Difícilmente puede hablarse de una guerra civil generalizada. Hay una diversidad de "guerras locales" con diferentes procesos y dinámicas, que alternan sus momentos de auge y se libran entre distintos adversarios, aliados o enfrentados sucesivamente. El territorio nacional aparece segmentado en regiones donde predomina el poder estatal y otras en las que

3. La existencia de los 140 grupos paramilitares, fue reconocida por el Ministro de Gobierno, César Gaviria, en un informe al Congreso de la República el 30 de septiembre de 1987. El Espectador, 1 de octubre de 1987, pp 1A y 13A.

dominan grupos guerrilleros o grupos paramilitares. Los límites entre unas y otras son relativamente fluidos y admiten zonas de transición.

La jurisdicción formal del Estado establece territorios fijos, limitados y acotados por fronteras, a los cuales corresponden identidades sociales y jurisdicciones administrativas y militares determinadas. En cambio, el espacio guerrillero va creándose a medida que el grupo ejerce influencia sobre veredas, localidades y regiones. La guerrilla se territorializa o desterritorializa siguiendo una dinámica similar a la de los grupos nómadas, ambulantes (4).

Algunos grupos guerrilleros tienen un grado mínimo de nomadismo. Su arraigo está determinado por su relación con las luchas sociales de la población, referidas a la defensa territorial, como el caso del comando Quintín Lame del Cauca. Otras guerrillas, embarcadas en proyectos estratégicos de conquista del poder, anteponen la preservación del grupo armado a la conservación del territorio y tienen, en consecuencia, un mayor grado de nomadismo. Muchos factores inciden en las decisiones de localización territorial de las guerrillas. Los principales son las condiciones geográficas (áreas selváticas o montañosas de refugio), la dotación local de recursos económicos, las tradiciones regionales de lucha social y la existencia de conflictos vigentes, las migraciones, la ocupación territorial de las Fuerzas Armadas y los grados de segmentación o cohesión social de la comunidad.

Según la combinación de factores de localización que predomine en cada región, la guerrilla tiene distintos tipos de territorios: a) zonas donde ésta ejerce influencia sobre la población; b) zonas de refugio; c) áreas de captación de recursos; y d) áreas de confrontación armada. Los territorios bajo influencia guerrillera tienen límites sociales: son espacios donde circula libremente el grupo porque ha establecido pre-

viamente sus relaciones con la población de apoyo, constituyendo una interioridad entre la guerrilla y la población. A esta interioridad se contraponen una exterioridad constituida por las fuerzas adversarias, la población local indiferente u hostil y los informantes de las fuerzas de seguridad, que representan una avanzada del adversario dentro de su territorio. Esta interioridad está plagada de tensiones y conflictos, atravesada por la tenaza de acciones ofensivas y defensivas de los frentes guerrilleros y de los grupos armados adversarios. Puede decirse que las acciones ejercidas dentro del territorio guerrillero tienen un carácter equivalente al de las funciones policivas, mientras las que se ejercen por fuera de él tienen un carácter militar.

Las zonas de refugio reúnen condiciones geográficas propicias para brindar seguridad a los campamentos, y las acciones que se desarrollan allí son básicamente defensivas. Las áreas donde las guerrillas captan recursos son aquellas donde hay actividades productivas y donde sus propietarios contribuyen, por extorsión ("impuesto de guerra", "boleteo" o "vacuna") o voluntariamente (caso de los cultivadores de alucinógenos), a la financiación de los grupos guerrilleros. Finalmente, las áreas de confrontaciones armadas son aquellas donde se produce el choque entre las guerrillas y sus enemigos armados. Los distintos tipos de territorios guerrilleros aquí descritos no son excluyentes. Puede haber regiones donde coincidan dos o más de ellos.

Siendo el territorio guerrillero variable, en proceso incesante de creación y desplazamiento, su expansión o contracción depende en buena medida de los fenómenos sociales que ocurran en el territorio bajo dominio del Estado. Sociológicamente hablando, éste también se expande o contrae según sean las relaciones de poder del Estado con la población local, estableciendo con ella, a su vez, sus aspectos de interioridad (Estado-poblaciones clientes) y aspectos de exterioridad (conquista, guerras locales, tratamientos propios de enemigo).

El dominio guerrillero determina en parte las operaciones de contrainsurgencia militar, también móviles, que amplían o recogen sus puestos de avanzada. Las Fuerzas Militares intentan una presencia suficientemente fuerte para

4. Deleuze y Guattari llaman la atención sobre la creación de espacios territoriales de los grupos nómadas, en contraste con los territorios sometidos al poder estatal. En su obra traen valiosos análisis sobre las relaciones de interioridad y exterioridad que definen los límites sociales de las máquinas de guerra. Ver, Gilles Deleuze and Félix Guattari, *Nomadology: The war Machine*, Semiotext (e), Columbia University, New York, 1986.

enfrentar a sus adversarios nómadas y disuadir sus ataques, pero no puede ser tan extensa como para dispersar indefinidamente las fuerzas oficiales.

Además del Estado, en amplias regiones la relación central de poder pasa a ser, progresivamente, la de los grupos de intereses privados, que organizan milicias móviles, con normas primitivas de justicia privada o de secta anticomunista. Estas normas, al aplicarse, crean un espacio de interioridad y adhesión, libre o forzada, y otro de exterioridad, constituida por las relaciones con las poblaciones que se consideren adversarias.

PRESENCIA DE ACCIONES GUERRILLERAS EN REGIONES CON CONFLICTO SOCIAL

Con excepción de la Guajira, la Costa Pacífica, gran parte de Nariño y las Comisarias de Amazonas y Vaupés, el resto de la geografía nacional es terreno de confrontación entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas del Estado. Esta lucha tiene las características de la guerra irregular por parte de los dos contrincantes: existe un equilibrio inestable de fuerzas móviles, que se interpenetran mutuamente y compiten por conquistar la adhesión y apoyo de la población. Cuando no lo consiguen, las dos fuerzas ejercen acciones intimidatorias o retaliatorias contra las comunidades que consideran como hostiles, alimentando un proceso indefinido de acciones y reacciones que tiene como víctimas a las poblaciones campesinas, indígenas y de trabajadores y propietarios.

El problema de la legitimidad de las luchas guerrilleras no puede seguirse definiendo con la idea de que las guerrillas son la vanguardia del ascenso popular al poder y que una vez conquistado éste, el pueblo conseguirá la igualdad y la democracia. Esta es una legitimidad puramente ideológica, voluntarista, que desconoce la realidad de las relaciones sociales conflictivas entre adversarios sociales. Si no puede otorgarse a las guerrillas un cheque en blanco de legitimidad a priori, su papel histórico debe juzgarse a la luz de los avances o retrocesos que sus acciones produzcan en las condiciones de existencia del pueblo y sus esperanzas de cambio, es decir, en su posición relativa a cada conflicto social en el que participa.

Este estudio no pretende dar una respuesta a este crucial problema. Se limita a informar sobre los conflictos sociales más importantes en las grandes regiones de violencia del país y sobre las áreas geográficas en las cuales ha habido acciones guerrilleras. Los investigadores han recopilado informaciones de prensa y otras fuentes para determinar los municipios donde han ocurrido, en los últimos tres años, operaciones armadas como combates, tomas de poblaciones, ataques a instalaciones militares, emboscadas, asalto a entidades y sabotajes. Con base en esos datos se han elaborado mapas regionales (Mapas Nos. 1-6) que señalan la intensidad de las acciones guerrilleras, así como un mapa síntesis (Mapa No. 7) que presenta una imagen global de la situación nacional. Los mapas reflejan solamente las áreas donde hay operaciones militares de las guerrillas. No expresan las zonas donde éstas ejercen influencia sobre la población ni las que sirven de refugio a los combatientes. Sin embargo, la proximidad geográfica de unas y otras permite hacer un análisis de conjunto sobre la conexión entre conflictos sociales y luchas armadas.

Entre 1985 y 1987, período de auge de las luchas armadas, las guerrillas han actuado en 339 de los 1.009 municipios del país. Hemos identificado seis grandes regiones de violencia insurgente y contrainsurgente: el Magdalena Medio, la región antioqueña, el piedemonte de la Cordillera Oriental (Llanos orientales y Amazonia), la región nororiental, la suroccidental y la Costa Atlántica. Detallando el análisis geográfico, hemos establecido cuarenta y cinco subregiones donde se libran conflictos armados. Se presenta a continuación una descripción de los principales conflictos sociales que simultáneamente dividen y vinculan a la población, y de los municipios donde ha habido acciones guerrilleras entre 1985 y 1987.

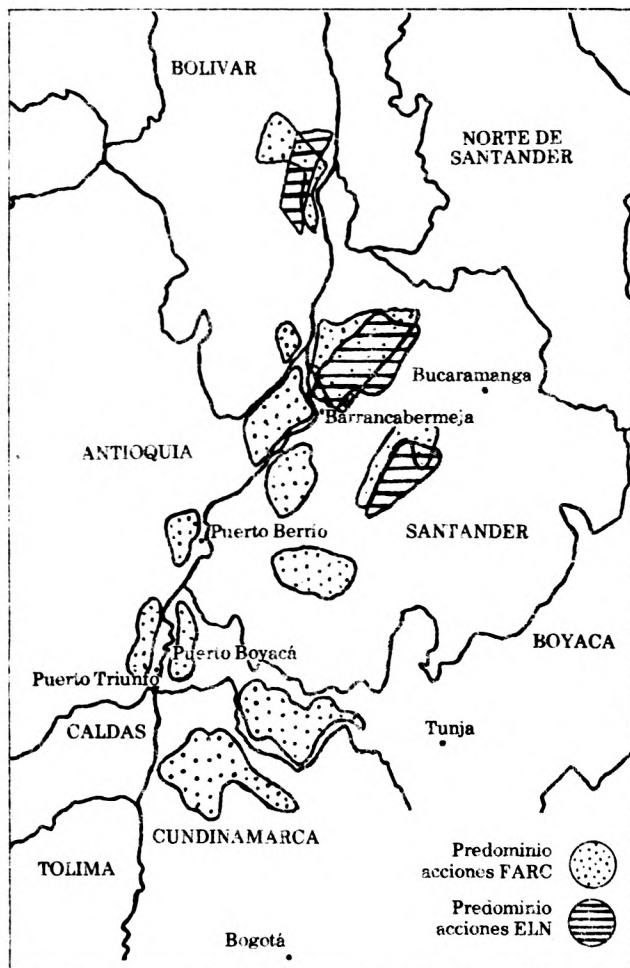
I. Magdalena Medio (Ver Mapa No. 1)

Esta región es la mayor área de colonización interior que expande la frontera económica de la región andina en su unión con las llanuras del Caribe. Atravesada por el río Magdalena, la región forma un valle rodeado por las cordilleras oriental y central, que se extiende desde La Dorada, al sur, hasta limitar al norte con la

MAPA No. 1

REGION: MAGDALENA MEDIO

Subregiones afectadas por operaciones armadas de la guerrilla (1985-1987)



Fuente: Elaborado con base en información del archivo del Instituto.

depresión formada por la confluencia de los ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Cesar (5).

Hasta la década de los años cincuenta el poblamiento de la región se limitaba a los puertos sobre el río Magdalena y pequeñas áreas circundantes, que abastecían a los barcos fluviales. El desarrollo de los campos petroleros en Barrancabermeja desde los años veinte, en

Yondó durante los treinta y en Puerto Bqyaca desde los cincuenta se hizo en forma de enclaves. A partir de ellos surgieron frentes de colonización, alimentados con migraciones provocadas por la violencia política de los años cincuenta y estimulados por la construcción del ferrocarril que va desde La Dorada hasta Santa Marta.

La colonización es un proceso inherentemente conflictivo: las tareas del desmonte estarán a cargo de los campesinos pero el destino final de las tierras es el latifundio ganadero que, en el Magdalena Medio, ocupa aproximadamente el 60% de la tierra agrícola (6). Entre una y otra fase median la descomposición de las pequeñas parcelas agrícolas y la concentración de la tierra por la compra y agregación de las mejoras en pocas manos.

Estudiando el proceso en sus distintas fases, pueden distinguirse varios conflictos típicos. En primer lugar, el conflicto propio de la integración social de campesinos de diferentes culturas regionales: en este caso interactúan la antioqueña, en el occidente; la santandereana, en el oriente; la costeña, en el norte; y la cundi-boyacense, en el sur de la región. La competencia entre pequeños y grandes poseedores por titular a su favor las tierras origina nuevos conflictos. Una vez constituido el polo ganadero, los propietarios demandan mayores áreas para expandir los hatos.

Las familias campesinas que venden las mejoras tienden a desplazarse hacia nuevos frentes de colonización. Sin embargo, la situación geográfica del Magdalena Medio, rodeado por áreas minifundistas, de ganadería establecida en Santander y Antioquia, creó límites infranqueables a la migración de los colonos, intensificando los conflictos mencionados.

Los antecedentes más remotos de la organización en guerrillas aparecen a comienzos de los años cincuenta. Rafael Rangel asumió el poder local como alcalde liberal en Barranca a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Posteriormente creó una guerrilla liberal que operó en el Magdalena Medio. Se

5. Un buen análisis* del conflicto en el Magdalena Medio es el que presenta Ibán de Rementería en su artículo "Hipótesis sobre la violencia reciente en el Magdalena Medio", en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, Pasado y presente de la violencia en Colombia, Bogotá, CEREC, 1986. También está el estudio de Gloria Lucy Zairora, Los moradores de la represión en el Magdalena Medio, Bogotá, CINEP, 1983.

6. Documento Guía, Foro Civil por la Paz, caso Magdalena Medio (copia a máquina), s. f., p. 5.

menciona la presencia de guerrillas liberales en la región selvática del Carare-Opón (7).

En el Magdalena Medio surgió en 1965 el Ejército de Liberación Nacional, con la toma de Simacota, que fue extendiendo su influencia en la región, incluyendo la zona nororiental de Antioquia, hasta cuando fue cercado y casi aniquilado en Anorí en 1973. Las FARC entraron a la región de Cimitarra y Puerto Boyacá a partir de ese momento, reemplazando así el vacío dejado por el ELN. Esta última guerrilla se recuperó lentamente y volvió a ocupar posiciones en la región a comienzos de la década de los años ochenta.

Estos antecedentes guerrilleros justificaron la ocupación militar de la región. Los controles del ejército significaron una intervención armada en los conflictos sociales a favor de los grandes propietarios, entre los cuales se cuentan altos oficiales de las Fuerzas Armadas, y en perjuicio de los colonos. No es extraño, entonces, que la población campesina tuviera una impresión favorable de las guerrillas, en el sentido de concebirlas como aliadas en su lucha por la tierra y en su defensa contra las agresiones militares. La legitimidad social de las guerrillas se alimenta, de esta manera, por el resentimiento de la población contra el Estado agresor.

La bonanza marihuanera de los años setenta se extendió también al Magdalena Medio. En los años ochenta grandes narcotraficantes invirtieron en tierras en la parte sur de la región, especialmente en Puerto Boyacá, Puerto Triunfo y Puerto Berrío, y encabezaron una reacción armada contra las guerrillas, a la cual se sumaron otros propietarios sometidos al boleteo y la vacuna. El ejército estimuló y protegió la creación de escuadrones armados, que además de luchar contra las guerrillas intimidan y expulsan a los colonos para asegurar el dominio de las grandes propiedades. Actualmente, el conflicto armado se libra en una frontera cercana a Barrancabermeja. La región sur del Magdalena Medio está dominada por los grupos paramilitares, desde Puerto Boyacá hasta Puerto

Carare y el sur de Yondó, a ambos lados del río Magdalena.

Las áreas donde las guerrillas han realizado acciones militares son:

1. En Cundinamarca, la vertiente del río Negro que desemboca al Magdalena, municipios de San Cayetano, Yacopí, Caparrapí, La Peña, La Palma, Topaipí y Utica. En ella actúan las FARC;
2. En Boyacá, ha habido acciones en Chiquinquirá, situada al extremo norte del altiplano cundiboyacense, en las cabeceras del río Suárez y a partir de ese vértice, las acciones se despliegan en la cuenca del río Minero, que desemboca al río Carare y éste al Magdalena. El río Minero está en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental. Los municipios afectados son Pauna, Maripí, Buenavista, San Pablo de Borbur, Muzo, Otanche y La Victoria. Esta región es el asiento de las minas de esmeraldas, cuya explotación ha generado históricamente agudos procesos de violencia;
3. En Boyacá, la región de Puerto Boyacá, municipio situado al extremo occidental del departamento, sobre el río Magdalena. En este municipio ganadero operaban las FARC. Su presión excesiva sobre los propietarios, sumada a la llegada de los narcoinversionistas, provocó una reacción armada contra la guerrilla, hasta lograr su desplazamiento de la región;
4. En Santander, la región suroccidental formada por los municipios de Landázuri, Cimitarra y Puerto Parra. Los dos primeros tienen sus cabeceras en el extremo sur de la serranía de los Cobardes y su jurisdicción comprende áreas integradas al Magdalena Medio. Cimitarra y Puerto Parra forman parte de la cuenca del río Carare, que desemboca en el Magdalena. De Puerto Parra también fueron desplazadas las FARC por la acción armada de los paramilitares;
5. En el noroccidente de Santander ha habido acciones en la región formada por Simacota, Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, El Carmen, Puerto Wilches y Sabana de Torres. Barrancabermeja, rodeada de campos petroleros y sede de la mayor refinería del país, es una ciudad industrial y comercial de más de 200.000 habitantes. Su cultura do-

7. Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia*, Bogotá, El Ancora Editores, 1983, pp. 33, 39y 54.

minante es obrera, con largas tradiciones de lucha sindical y popular. La ciudad ha crecido aceleradamente en las últimas dos décadas como efecto de la migración de campesinos desplazados por la violencia de toda la región circundante. Esas circunstancias han propiciado la presencia de las FARC y el ELN en la ciudad e igualmente las incursiones armadas de los paramilitares, quienes identifican y liquidan a los líderes cívicos y obreros.

Puerto Wilches es puerto sobre el río Magdalena. Sabana de Torres está situado junto al piedemonte occidental de la cordillera, al noroeste de Bucaramanga. La segunda población en importancia de la región, después de Barrancabermeja, es San Vicente de Chucurí, que tiene 50.000 habitantes y es municipio rico en cultivos de cacao y café.

En el corregimiento de Yarima, perteneciente a San Vicente de Chucurí, la población campesina de catorce caseríos, que alcanza a más de 500 familias, ha sido desplazada de sus parcelas durante los meses de agosto y septiembre de 1988 por el enfrentamiento entre las FARC y un grupo paramilitar establecido en la Inspección de San Juan Bosco de Laverde;

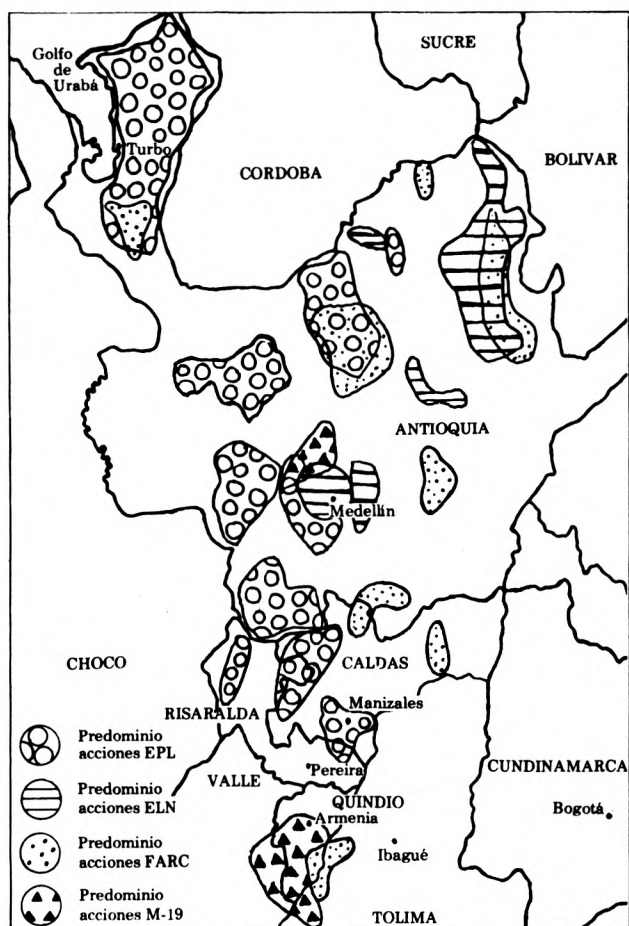
6. La región antioqueña del Magdalena Medio ha recibido la influencia de compradores de haciendas provenientes del narcotráfico. Comprende los municipios que limitan con el río Magdalena; de sur a norte son Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Yondó. La región ha sido escenario de operaciones guerrilleras y de acciones de grupos paramilitares, que en los últimos años han desplazado la influencia de las FARC de las primeras tres poblaciones mencionadas. Puerto Triunfo y Puerto Berrío son centros ganaderos; en Puerto Nare, además de ganadería y agricultura, está establecida la empresa Cementos Nare, cuyos trabajadores se han visto envueltos en la violencia como víctimas de los grupos paramilitares. Yondó, situado frente a Barrancabermeja, tiene los campos petroleros de Casabe y es asiento de colonización campesina con presencia de las FARC. El centro regional más poblado y de mayor importancia es Puerto Berrío, con 23.000 habitantes.
7. La región sur de Bolívar ha sido teatro de operaciones de las FARC y del ELN, com-

prendiendo los municipios de San Pablo, Simití, Morales y Santa Rosa. Las tres primeras poblaciones se ubican en la planicie baja, al oriente de la serranía de San Lucas, mientras Santa Rosa está en las estribaciones de la misma serranía. Toda la región está incomunicada por tierra con Cartagena, de la que depende políticamente. La población campesina combina la pesca y la agricultura, y los propietarios con más tierra la ocupan en ganadería extensiva.

II. Región antioqueña (Ver Mapa No. 2)

Esta región abarca todo el departamento de Antioquia (exceptuando los municipios inscritos dentro de la dinámica del Magdalena Me-

MAPA No. 2
REGION ANTIOQUEÑA
Subregiones afectadas por operaciones armadas de la guerrilla (1985-1987)



Fuente: Elaborado con base en información del archivo del Instituto.

dio), así como los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Su pobramiento y su relativa homogeneidad cultural obedecen a los procesos de colonización llevados a cabo por los antioqueños hacia el sur, desde el siglo pasado, y más recientemente hacia las tierras bajas del departamento de Antioquia: el golfo de Urabá, las planicies del norte hasta llegar a Córdoba y las estribaciones orientales de la Cordillera Central.

Medellín y los municipios situados a su alrededor se han convertido, desde hace unos años, en el epicentro de la confrontación que los carteles del narcotráfico realizan no sólo entre ellos mismos, sino también contra el Estado y contra dirigentes sindicales y gremiales. A esta dinámica de violencia se suman algunas acciones urbanas de grupos guerrilleros como el ELN, el EPL y el M-19, así como una creciente delincuencia común asociada con la drogadicción y el desempleo.

Excluyendo el área metropolitana de Medellín, las zonas más críticas dentro de la región antioqueña coinciden con las áreas de colonización. En primer lugar, está Urabá donde se desarrollan en forma paralela los conflictos asociados con la colonización de las tierras bajas adyacentes al golfo y con el cultivo comercial de banano para la exportación. En la zona bananera de Urabá, el conflicto se desarrolla principalmente entre los empresarios y los trabajadores agrícolas alrededor de la distribución y reinversión de los beneficios generados por la producción y exportación de la fruta (8). En el resto de la región se libra el conflicto entre la economía campesina que lucha por consolidarse y el neolatifundio ganadero, cuya expansión es apoyada en parte por la inversión de capital del narcotráfico.

En segundo lugar, está la zona del bajo Cauca conformada por las planicies del norte del departamento. Allí aparecen de nuevo los conflictos derivados de una colonización reciente, atraída por el oro, que presiona la propiedad territorial concentrada en un pequeño número de haciendas ganaderas. La bonanza del oro,

generada por el alza en los precios internacionales del metal a partir de 1972, constituyó un estímulo importante para la migración hacia esta región, pero los incrementos en la producción no han correspondido a una elevación correlativa de los niveles de vida de la población. Esta situación se debe, principalmente, a la explotación irracional de los recursos mineros, que sumada a la creciente concentración de la propiedad con sus secuelas de expulsión de la fuerza de trabajo y a la carencia de servicios mínimos para la gran mayoría de la población (9), configuran la problemática general de la zona.

En tercer lugar, al oriente de Medellín, bajando hacia las estribaciones orientales de la Cordillera Central se encuentra la zona de los embalses. La población de esa región se ha visto afectada por la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos que obligan al desplazamiento de los campesinos además de causar enormes daños ecológicos. Posteriormente, el conflicto se libra entre las empresas del sector eléctrico y las poblaciones locales por la apropiación de los beneficios generados por las empresas.

Finalmente, hacia el sur de Medellín está la zona más homogénea, la cafetera, que abarca el sur y suroccidente de Antioquia, el Viejo Caldas y el norte del Valle del Cauca. La transformación más importante sufrida recientemente por la estructura de la propiedad en esta zona está asociada con el cambio de variedad del café arábigo al café caturra. Ella ha propiciado una creciente concentración de la tierra en las manos de grandes y medianos cafeteros lo cual, a su vez, ha implicado una pauperización de los pequeños propietarios. No obstante, el crecimiento reciente de las acciones guerrilleras en la región puede estar más relacionado con las actividades de financiación de los grupos armados que con la existencia de un conflicto agudo y abierto.

A esta variada gama de conflictos sociales se añade, en los últimos años, una intensa acción armada de la guerrilla. El EP1, ha actuado fundamentalmente en Urabá, en el norte y occidente del departamento de Antioquia, extendiéndose más recientemente hacia el Viejo Cal-

8. Ana María Bejarano, "La violencia regional y sus protagonistas: el caso de Urabá" en *Análisis Político*, No. 4, mayo-agosto de 1988, pp. 43-53.

9. DANE-DAPRE, *El Plan Social por la Paz. Una estrategia de participación comunitaria*, Bogotá, DANE, julio de 1986, pp. 25 y 26.

das hasta llegar al departamento de Risaralda. El ELN ha concentrado sus acciones en el extremo nororiental de Antioquia, mientras que las FARC actúan también en esta zona, en el noroccidente, en Urabá, en la zona de los embalses y hacia el sur en el departamento de Caldas. El M-19 ha protagonizado algunas acciones armadas en el sur del Quindío. Las subregiones afectadas son:

1. En Urabá, los nueve municipios que conforman la zona han sido afectados por acciones guerrilleras, predominantemente del EPL, pero también de las FARC, hacia el sur. Mutatá y la zona sur de Chigorodó viven todavía un proceso intenso de colonización campesina con signos crecientes de expansión del latifundio ganadero. Desde Chigorodó, pasando por Carepa y Apartadó hasta llegar al centro de Turbo, se extiende el distrito bananero. Hacia el norte y el oriente de Turbo están San Pedro de Urabá, Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes donde predomina el latifundio ganadero rodeado por núcleos de colonización dedicados al cultivo del cacao, el maíz, la yuca y el plátano. Los nueve municipios abarcan un total de 450 mil hectáreas de tierras planas y fértiles situadas entre la Serranía de Abibe, al oriente, y el golfo de Urabá al occidente;
2. En la vertiente occidental de la Cordillera Occidental, los municipios afectados por acciones guerrilleras son: Urrao, Buriticá, Cañasgordas, Frontino, Uramita, Peque y Ituango; en la vertiente occidental del Río Sucio que va hacia Urabá, está Dabeiba;
3. La zona anterior comunica hacia el noroccidente con Urabá y hacia el norte con la del bajo Cauca, que cubre las planicies bajas del norte de Antioquia en sus límites con Córdoba. Allí nació, en los años sesenta, el Ejército Popular de Liberación, EPL, que hoy despliega una gran actividad en la zona. Los municipios afectados son: Cáceres, Tarazá y Caucasia, situados sobre el río Cauca. Sobre el río Nechí están Nechí, Zaragoza y El Bagre. Remedios y Segovia están ubicados en las planicies nororientales situadas entre la Cordillera Central y la Serranía de San Lucas. Un poco más al centro, en la vertiente de la Cordillera Central que desemboca en el bajo Cauca están Yolombó, Valdivia, Vegachí, Amalfi, Anorí, Campamento y Yarumal;

4. Al occidente de Medellín, en la vertiente occidental de la Cordillera Central que se dirige al río Cauca están Montebello, Caldas, Amagá, Titiribí, Sopetrán, Belmira, Liborina, Sabanalarga y Entremós;
5. Sobre la Cordillera Central en la vertiente que baja hasta el Magdalena Medio, los municipios donde han ocurrido acciones guerrilleras son Argelia, Cocorná, Carmen de Viboral y Rionegro. En esa misma vertiente, en la zona de los embalses y las hidroeléctricas están San Carlos, San Rafael y San Roque;
6. En la zona cafetera del occidente y sur de Antioquia, están los siguientes municipios afectados por acciones de grupos guerrilleros: en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental sobre el río Cauca está Anzá; le siguen Caicedo, Betulia, Salgar y Bolívar; en la parte montañosa, entre el río Cauca y el río San Juan están Andes, Jardín, Pueblo Rico, Támesis y Caramanta. Estos últimos limitan al sur con la zona cafetera del Viejo Caldas;
7. Los municipios del departamento de Caldas donde han tenido lugar acciones de la guerrilla son: en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, Risaralda y Riosucio; en la vertiente occidental de la Cordillera Central, Villa María, Manizales, La Merced y Pécora; y en la vertiente oriental de la misma cordillera, Marquetalia y Samaná;
8. En Risaralda, varios municipios han sido afectados en los últimos años por acciones de la guerrilla. Estos son: en la vertiente occidental de la Cordillera Central, Pereira y Santa Rosa de Cabal; en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental, Mistrató, Guática y Quinchía; y en la vertiente occidental de la misma cordillera, Pueblo Rico;
9. Las cuatro poblaciones del Quindío afectadas por acciones guerrilleras están situadas en la vertiente occidental de la Cordillera Central, al suroriente de Armenia, y son: Génova, Pijao, Calarcá y La Tebaida.

III. Piedemonte de la Cordillera Oriental (Ver Mapa No. 3).

Aunque la ocupación de los Llanos Orientales con hatos ganaderos tiene más de dos siglos, en los últimos cuarenta años han surgido procesos de colonización campesina provenientes

de la región andina. La frontera de colonización avanzó por el piedemonte de la Cordillera Oriental sobre dos ecosistemas distintos: las llanuras orientales cubiertas de pastos naturales y bosques de galería que rodean los caños y ríos, por una parte, y las selvas amazónicas, cuya frágil fertilidad depende de la existencia de la biomasa, por otra.

El piedemonte llanero es una franja de 20 a 50 km de ancho, donde la sedimentación aluvial proveniente de la cordillera fertiliza los suelos, haciéndolos aptos para la agricultura comercial y campesina. Sin embargo, en vez de estabilizarse allí la población, la ruina económica de los colonos y la presión latifundista, que usó los mecanismos del "endeude" y la violencia, expandieron hacia el oriente la ola colonizado-

ra. Esta encuentra otras tierras aptas sólo en las vegas fértiles de los caños y ríos, que protegen las fuentes de agua, causando su destrucción, lo que inicia procesos de desertificación del Llano. Como las comunidades indígenas de los Guahíbos, Piapocos, Sálivas, Curripacos y otras etnias ocupaban los nichos ecológicos aptos para la producción, los colonos los han desplazado violentamente a zonas de refugio en el Vichada y las selvas del Guaviare, causando un nuevo descenso demográfico.

La ocupación humana del Llano ha significado una doble tragedia: el desplazamiento y la destrucción de los pueblos indígenas y la trashumancia de los colonos empobrecidos para dar paso al latifundio ganadero, beneficiario final de la colonización.

La ocupación de la selva amazónica ha avanzado en tres frentes principales: los ríos Caguán y Orteguzaza, en el Caquetá; la región de San José del Guaviare-Calamar, al sur del río Guaviare; y el valle del río Guamuez, en el Putumayo. La colonización de la selva por campesinos andinos sigue la pauta de la tumba y quema del bosque, el establecimiento de cultivos civilizados por un corto período (2 a 4 años) y la siembra de pastos para ganadería. Esta pauta es finalmente destructora del ecosistema y contrasta con la que practican las comunidades indígenas, que consiste en la apertura de pequeños lotes de cultivo que luego de una o dos cosechas, permanecen en descanso durante un largo período. Los indígenas, además, combinan una amplísima variedad de fuentes alimenticias y medicinales provenientes de la selva y son, por tanto, conservacionistas por excelencia, en contraste con los colonos.

La segunda forma de utilización económica de la selva amazónica es la extracción de materias primas como caucho, chicle, balata, pieles finas, micos, peces ornamentales y plantas medicinales. La extracción es aprovechada por empresarios y comerciantes mediante la utilización de la fuerza de trabajo indígena por el antiguo sistema del "endeude", una forma disfrazada de la esclavitud. El conflicto implícito entre grupos mestizos e indígenas rara vez trasciende la región. La conquista y el adoctrinamiento de los indígenas está a cargo de comunidades religiosas, católicas y protestantes.

MAPA No. 3

REGION: PIEDEMONTE DE LA CORDILLERA

ORIENTAL

Subregiones afectadas por operaciones armadas de la guerrilla (1985-1987)



Fuente: Elaborado con base en información del archivo del Instituto.

En la última década, la economía de los frentes colonizadores amazónicos ha girado en torno del cultivo de plantas de coca y el procedimiento artesanal e industrial de la cocaína refinada. Es un cultivo y procesamiento de alto rendimiento, relativo a otros productos, para el cultivador. La coca ha logrado monetizar la economía regional, con períodos de auges y depresiones según el comportamiento de los precios. El carácter ilegal del cultivo ha distanciado a los campesinos del gobierno. Las relaciones entre las autoridades y la población se transforman en complicidad y soborno que crean una economía tributaria clandestina a cambio de tranquilidad y libertad de cultivo del alcaloide, con interrupciones abruptas por el “sorpresivo” descubrimiento y destrucción de cultivos y laboratorios, cuando las autoridades necesitan mostrar éxitos en su lucha contra el narcotráfico.

Durante los años cincuenta las áreas ocupadas por hatos ganaderos y colonos se organizaron en guerrillas liberales contra el gobierno conservador, que se desmovilizaron al comenzar el período del general Rojas Pinilla. Muchos exguerrilleros ocuparon la región del Ariari (Meta) y descendieron hacia el Guaviare y el Caquetá, continuando su actividad colonizadora. A finales de esa década y comienzos de los años sesenta llegaron al Ariari y a la región del río Guayabero las famosas “columnas de marcha” protegidas por las FARC, verdaderos éxodos de campesinos perseguidos desde el sur del Tolima por el Ejército, en lo que se llamó luego la “colonización armada” (10).

El movimiento campesino de los años setenta tuvo fuerza en Arauca, Casanare, Meta y Caquetá, expresando los conflictos propios de la colonización campesina contra los grandes propietarios (11). La represión contra el movimiento campesino y las tradiciones de los terratenientes en el sentido de administrar la violencia directa mediante cuadrillas armadas crearon una situación propicia a la alianza entre colonos y guerrillas, que se manifestó con mayor fuerza en el Caquetá, con la expansión del control ejercido por las FARC.

La presencia del ELN en Arauca está relacionada con los problemas campesinos de la colonización del Sarare, promovida por el INCORA en los años setenta y con la explotación de los yacimientos petrolíferos de Caño Limón, que establecen un fuerte contraste entre la precariedad del Estado en la región y la magnitud de las inversiones realizadas por empresas petroleras multinacionales en asocio con Ecopetrol.

En el Meta se ha producido un desarrollo espectacular de la agricultura empresarial en el área del piedemonte, en el triángulo formado por Villavicencio, San Martín y Puerto López. La presencia de las FARC en el sur del Ariari, San José del Guaviare y la falda oriental de la serranía de La Macarena reemplaza las instituciones estatales y coincide con las zonas de colonización consolidada.

En los últimos años las FARC han extendido sus áreas de operaciones al Casanare y Arauca, hacia el norte, y al río Vichada y la serranía del Naquén en el Guainía, hacia el oriente.

La influencia guerrillera está siendo desplazada a medida que avanza geográficamente la agricultura comercial y que mejora la infraestructura vial y de servicios. Esto es notable en el Meta, desde Villavicencio hacia San Martín y Puerto Lleras, al sur, y hacia Puerto López, al oriente. Este desplazamiento de la guerrilla ha sido reforzado por la inversión de narcotraficantes en tierras en las dos áreas mencionadas y la decisión que ellos tomaron en el sentido de enfrentar a las FARC con escuadrones armados, generalmente reclutados en Puerto Boyacá y la región esmeraldífera de Muzo y Otanche.

Las subregiones del piedemonte oriental donde ha habido acciones guerrilleras en los años de 1985 a 1987 son:

1. El occidente de Arauca, que comprende los municipios de Arauca, Tame, Arauquita y Saravena. El poblamiento de Arauca sigue el curso de dos ejes viales en dirección occidente-oriental, que unen el Norte de Santander con la intendencia: uno que pasa por Cúcuta, Saravena y se extiende hasta la población de Arauca, y otro que une a Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón, en el río Meta. Las estribaciones al oriente de la

10. William Ramírez Tobón, “La guerrilla rural en Colombia: ¿Una vía hacia la colonización armada?”, en *Estudios Rurales Latinoamericanos*, Vol. IV, No. 2, Bogotá, mayo-agosto de 1981; y Alfredo Molano, *Selva adentro*, Bogotá, El Ancora Editores, 1987.

11. León Zamosc, op. cit.

Sierra Nevada del Cocuy, que tiene hasta 5.500 m.s.n.m. constituyen un refugio natural montañoso para las guerrillas de las FARC y el ELN que actúan en Ai auca;

2. El piedemonte del Caquetá, cuyos ejes de colonización siguen la dirección de las cuencas de los ríos Caguán y Orteguaza, es la segunda subregión de operaciones guerrilleras y probablemente el área más fuerte de las FARC. Todos los municipios afectados por acciones guerrilleras, excepto Cartagena del Chairá (ubicado en la cuenca del Caguán), quedan sobre el eje vial que se extiende del suroeste hacia el noreste y que comunica, de sur a norte, a Curillo, San José del Fragua, Albania, Valparaíso, Florencia, Montañita, Paujil, Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán. Estas poblaciones constituyen el área de colonización antigua del Caquetá. Existen dos ventajas naturales en la región para la guerra de guerrillas: la Cordillera Oriental, que la separa del Huila, con elevaciones hasta de 3.000 m.s.n.m., y la selva amazónica, cuyas vías de comunicación son los ríos. El control armado de los ríos determina el dominio territorial de la guerrilla;

3. El piedemonte del Meta es teatro de operaciones guerrilleras en varias zonas. Tomando de norte a sur, ha habido acciones en Cumaral, Villavicencio, Castilla La Nueva, Guamal, Cubaral, San Martín y Granada, situadas en las llanuras adyacentes a la Cordillera Oriental.

Entre el río Ariari y la Serranía de La Macarena ha habido acciones en Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa y La Macarena. Puerto Lleras es puerto sobre el río Ariari y lugar de paso hacia San José del Guaviare. San Carlos de Guaroa lo es sobre el río Metica; y Puerto López y Puerto Gaitán lo son sobre el río Meta, fuera del piedemonte.

Al norte del Meta, en el oriente cundinamarqués, hay otra área de acciones de las FARC alrededor del municipio de Medina, al norte de Cumaral. La población está separada del cañón del río Guavio, donde se construye la mayor hidroeléctrica del país, por los Farallones de Medina, refugio tradicional de la guerrilla;

4. La subregión de San José del Guaviare es teatro de operaciones de las FARC. La colo-

nización de esta zona provino principalmente de los ríos Ariari y Guayabero, y recibió su impulso definitivo con la construcción de la carretera que comunica a Puerto Lleras con San José del Guaviare. A finales de los años sesenta hubo migración de antiguos caucheros desde el Vaupés, provocada por la decisión gubernamental de liquidar el sistema esclavista que mantenía sometida a la población indígena de esa región;

5. La región del Casanare ha presenciado acciones guerrilleras en el piedemonte, en los municipios de Hato Corozal, Paz de Ariporo, Nunchía, Yopal y Monterrey; y en el llano abierto, en los municipios de Maní, Trinidad y Orocué. Los ríos Casanare, al norte, y Meta, al sur, cruzan la intendencia de occidente a oriente.

El Casanare ha recibido corrientes de colonización de agricultores andinos de Boyacá y los Santanderes, que se han enfrentado al monopolio extensivo de los baldíos por los dueños de hatos ganaderos. Estos han protegido tradicionalmente las vegas de los ríos de la ocupación campesina. La protección de las tierras se camufla bajo las acciones de represión del abigeato, mediante las cuales los dueños de hatos logran "criminalizar" los intentos de fundar parcelas campesinas;

6. La intendencia de Putumayo es la región predominantemente selvática situada al oriente del Nudo de Los Pastos y ha sido poblada por inmigrantes nariñenses. Hay acciones guerrilleras en Mocoa, la capital, y Villa Garzón, al sur de ésta, ambas en la cuenca del río Mocoa; en el valle del río Guamuez, lugar de explotación de yacimientos petroleros y de la refinería de la Texas Petroleum Company, en Orito y La Hormiga; en Puerto Asís, sobre el río Putumayo; finalmente, en San Francisco, población ubicada en el Valle de Sibundoy, sobre los 2.500 m.s.n.m., que es asiento de las comunidades indígenas de los Sibundoyes (Ingas y Kamsá). Los grupos que actúan en la intendencia son las FARC y el EPL.

Putumayo ha sido en las últimas tres décadas un frente activo de colonización, que se ha establecido en el valle del río Guamuez, extraordinariamente fértil, y a lo largo del río Putumayo, hasta Puerto Leguizamo. La comunicación terrestre es la carretera Pas-

to-Mocoa, construida a pico y pala sobre los desfiladeros del Nudo de los Pastos. Actualmente se está terminando la vía Pitalito-Mocoa, que comunicará al Huila y Bogotá con la intendencia y permitirá colonizar toda la región al oriente de la Bota Cauca y comunicar el suroriente con el sur de la selva amazónica, y

7. Finalmente, hay acciones de las FARC en la región boyacense de la vertiente que baja hacia los Llanos desde la cordillera oriental. Los municipios afectados en los últimos años son Pisba, situada entre el Páramo del mismo nombre y Yopal; Labranzagrande, en la vertiente del río Cravo Sur; en Aquitania, junto al lago de Tota en la cima de la Cordillera Oriental; y en Páez, Miraflores, Campohermoso y Santa María, en la vertiente del río Mueche que desemboca en el río Upía; finalmente, en San Luis de Gaceno, en el piedemonte de la misma vertiente.

IV. Región del nororiente (Ver Mapa No. 4)

La estructura social y agraria de la región del nororiente puede entenderse geográficamente si se parte de Bucaramanga como epicentro y se trazan tres grandes ejes de pobiamiento: el primero es el valle del río Suárez, al sur de la ciudad, que va desde Chiquinquirá hasta su desembocadura en el río Sogamoso; el segundo, en dirección sureste, es el valle del río Chicamocha, en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental desde su quiebre en la Sierra Nevada del Cocuy; el tercero, en dirección norte, cubre las estribaciones oriental y occidental de la Cordillera Oriental, hasta llegar a la región de Ocaña. Los tres ejes tienen mayor densidad de población campesina. La tenencia de la tierra se distribuye entre minifundios y medianas propiedades dedicadas a los cultivos de café, cacao y caña, preferencialmente y a la ganadería semi-intensiva. Los sistemas de tenencia de la aparcería y el arriendo conservan señalada importancia en algunas áreas.

Las tres regiones expulsan población hacia las tierras bajas. Los frentes de colonización se dirigen hacia las regiones de Cata tumbo y Tibú, hacia el sur de Cúcuta en busca de la región del Sarare y finalmente hacia el valle del Magdalena Medio, incluyendo el sur del Cesar. La región en general sufre un estancamiento econó-

MAPA No. 4

REGION: NORORIENTE

Subregiones afectadas por operaciones armadas de la guerrilla (1985-1987)



Fuente: Elaborado con base en información del archivo del Instituto.

mico, acentuado por los cambios en la economía fronteriza con Venezuela. En la década de los años ochenta ha habido una inversión de los flujos comerciales, que antes se dirigían a Venezuela, constituyendo un mercado para la producción agrícola y artesanal de la región. Ahora invaden los mercados colombianos, afectando a los campesinos y artesanos.

La forma más notable de expresión gremial y política de la población campesina y los sectores urbanos populares del nororiente ha sido, en 1987 y 1988, la organización de las marchas campesinas y los paros cívicos. Las marchas y los paros han sido promovidos por un nuevo movimiento político, A Luchar, que reúne a sectores campesinos, maestros y trabajadores

urbanos, y por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Las marchas de junio de 1987 concentraron alrededor de 102 mil campesinos que se desplazaron desde diferentes veredas hacia las cabeceras municipales de Barranbermeja, San Vicente de Chucurí, Ocaña, Tibú, Valledupar, Saravena, Tame, Arauquita, Chitagá y Málaga. El medio de presión de las marchas es la ocupación de los centros urbanos y el bloqueo de carreteras hasta lograr una negociación con el Estado. Las demandas de los campesinos incluyeron la satisfacción de las necesidades locales y la desmilitarización de la región. La respuesta gubernamental, en esta primera ocasión, fue la negociación y la firma de convenios, en los cuales el Estado se comprometió a realizar inversiones públicas. La desmilitarización no fue objeto de negociación.

Las marchas de mayo de 1988 reunieron alrededor de 115 mil campesinos, e incluyeron no sólo al nororiente sino a amplias zonas del norte de Antioquia y de la Costa Atlántica. Las demandas comprendieron el reclamo por el incumplimiento de los compromisos oficiales del año anterior, la revisión de la política petrolera, el respeto por el derecho a la vida, la desmilitarización y la terminación de la guerra sucia contra la población civil. El ELN y las FARC apoyaron la convocatoria a las marchas pero no se infiltraron entre los marchistas, conforme al acuerdo celebrado en este sentido con los líderes gremiales organizadores de las mismas (12).

La respuesta del Estado fue violenta. Todas las concentraciones de campesinos, algunas de las cuales reunían hasta ocho mil personas, fueron detenidas en las carreteras, y en la mayoría de ellas el ejército realizó detenciones y disparó contra los marchistas. Fueron notables las masacres en La Fortuna y Llana Caliente que, sumadas a las de otros lugares donde se disparó contra la población, dejaron un saldo cercano a los dos centenares de víctimas entre muerte y heridos (13).

Vale la pena hacer una reflexión global sobre las paradojas que ofrece la región nororiental.

Desde el punto de vista popular, las marchas campesinas y movilizaciones urbanas son, en el fondo, un reclamo por el fortalecimiento del Estado. En este sentido, el apoyo del ELN a la organización popular tiende a incrementar la capacidad de participación de la población regional en los procesos de desarrollo nacional. El surgimiento de una movilización campesina y popular en la región es una oportunidad para el fortalecimiento de la guerrilla si el Estado no responde a las demandas populares y la movilización es tratada como subversión y reprimida con violencia, como ocurrió en 1988.

El gobierno del presidente Barco ha dado un viraje en su respuesta a la movilización del nororiente: respeto a las marchas de 1987 y criminalización a las de 1988. Las fuerzas populares, a su vez, tienden a radicalizarse: entre los campesinos crece la presión en favor del paro agrario, que consiste en el boicot al envío de alimentos a las ciudades. También aumenta la intensidad de los ataques guerrilleros.

El marco de conflictos sociales que sacuden la región del nororiente no se agota, sin embargo, en la problemática campesina. El descubrimiento y la explotación de yacimientos petroleros en Caño Limón (Arauca) y el oleoducto que los comunica con el antiguo trayecto Cúcuta-Tibú-Coveñas ha convertido a ésta en un área estratégica para la economía nacional. El ELN asumió la bandera de exigir una profunda revisión de la política petrolera del país mediante la nacionalización de la industria, como condición para que las utilidades del petróleo se reinviertan en el desarrollo regional y nacional. Los medios utilizados por la guerrilla para presionar estas demandas han sido la extorsión a las compañías extranjeras y el sabotaje contra el oleoducto. En forma secundaria, la guerrilla ha aprovechado su capacidad de presión a las compañías petroleras y a Ecopetrol para exigir reinversiones en el desarrollo local, con lo cual conquista nuevas bases de apoyo. Esta estrategia del ELN ha sido considerada como terrorismo y ha tenido, por tanto, un alto costo político para esa agrupación.

Las subregiones del nororiente donde se han concentrado las operaciones guerrilleras son:

1. El valle del río Suárez, que recorre a Santander de sur a norte, desde su nacimiento

12. Entrevista con dirigente campesino de la ANUC, Barranbermeja, agosto de 1988, archivo del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales.

13. *Ibidem*.

- en la laguna de Fúquene (Boyacá) hasta su desembocadura en el río Sogamoso. Esta región queda al norte de la zona esmeraldífera de Boyacá. Está circundada por la serranía Los Cobardes, al oeste, y por el conjunto montañoso central de la Cordillera Oriental al este. En la vertiente oriental de la Cuchilla de Los Cobardes ha habido acciones guerrilleras en los municipios de Puente Nacional, Sucre, Guavatá, Vélez, Bolívar, Chipatá, La Paz, Santa Elena del Opón, Simacota y Hato. En las planicies al oriente del río Suárez ha habido operaciones guerrilleras en Suaita, Charalá, Los Santos;
2. La segunda subregión en Santander forma un abanico en las montañas alrededor de Bucaramanga, al este de la ciudad, integrado por los municipios de Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Rionegro, Playón, Cerreto, Concepción, Guaca, Charta y Suratá;
 3. La subregión nororiental de Boyacá, en las estribaciones orientales de la Cordillera Oriental, constituye un corredor de paso entre Arauca y Norte de Santander. Los municipios de Chiscas y Cubará han sido teatro de acciones guerrilleras. El relieve de la subregión, situada al noroeste de la Sierra Nevada del Cocuy, es propicio para hacerla un área de refugio del ELN en sus acciones en Arauca. El río Margua, que se transforma en el Arauca al llegar al llano, corta la topografía formando la cuchilla de Hoya Negra. Por ella pasa el oleoducto Caño Limón-Cúcuta;
 4. En Norte de Santander, la subregión de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental, cuya economía depende de la situación fronteriza, es escenario de operaciones del ELN y del EPL. Forman parte de ella, de sur a norte, los municipios de Toledo y Chitagá en la vertiente del río Margua; Pamplona y Herrán, en las cabeceras del río Floresta; Cúcuta, San Cayetano y El Zulia ubicados en la parte baja del río Zulia; Sardinata, en la vertiente alta del río del mismo nombre; y Tibú, centro petrolero y de colonización, junto al río Tibú, cerca de la frontera;
 5. La subregión nortesantandereana del altiplano, situada al noroeste de Cúcuta, ha sido otro teatro de acciones guerrilleras. El epicentro regional es Ocaña y comprende además los municipios de Cáchira, Abrego, La Plaza, Hacari, San Calixto, Teorama, Convención y El Carmen;
 6. La subregión del centro y sur del Cesar pertenece geográficamente al Magdalena Medio por su localización; por su relieve plano es parte de las llanuras del Caribe; no obstante, la hemos incluido en el nororiente desde el punto de vista de los conflictos sociales y las luchas armadas. Esta opción se justifica porque la propiedad de las haciendas se controla en buena medida desde Bucaramanga, la migración campesina que la ocupa viene de las montañas de los dos Santanderes y la agrupación guerrillera que actúa en ella es el ELN, que domina el nororiente. Los municipios donde ha habido acciones guerrilleras son San Alberto y San Martín, localizados en inmediaciones del piedemonte occidental de la Cordillera Oriental; Río de Oro, más al norte, dentro del área de influencia de Ocaña; Pelaya y Pailitas, al pie de las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental. Tamalameque es puerto sobre el río Magdalena; Curumaní y Chiriguaná están en la llanura al oeste de la Serranía de los Motilones.
- ### V. Región suroccidental (Ver Mapa No. 5)
- Esta región es escenario de fuertes contrastes entre la gran explotación agrícola y ganadera industrializada y la economía minifundista indígena o campesina. Esta contradicción entre la agroindustria moderna en expansión y la agricultura tradicional en franco proceso de deterioro se manifiesta principalmente en los valles de los tres grandes ríos que atraviesan la región: el Magdalena, el Cauca y el Patía.
- Las grandes propiedades ganaderas o agroindustriales han ocupado paulatinamente las tierras aluviales de estos valles interandinos desplazando a su paso a los indígenas y campesinos hacia las laderas de las tres cordilleras que los circundan. El sur del departamento del Valle, incluyendo el norte del Cauca, es la zona hacia la cual se dirige actualmente la expansión de los cultivos comerciales de caña, sorgo y ajonjolí. El valle alto del río Patía, al suroccidente del departamento del Cauca, es área de grandes ganaderías tecnificadas para la producción de carne y leche. Al oriente, pasando la Cordillera Central, está el valle del alto Magdalena que incluye el centro y el norte del departamento del Huila y la zona oriental del

MAPA No. 5

REGION: SUROCCIDENTE

Subregiones afectadas por operaciones armadas de la guerrilla (1985-1987)



Fuente; Elaborado con base en información del archivo del Instituto.

departamento del Tolima. Sus tierras están dedicadas al cultivo comercial de arroz, combinado con ganadería extensiva en el Huila y con plantaciones aldoneras en Tolima.

Algunas áreas de colonización absorben parte de la migración producida por el avance de la agricultura comercial tecnificada sobre las zonas de economía tradicional. Estas son, principalmente, la bota caucana, el sur y el oriente del Huila sobre el filo de la Cordillera Oriental en sus límites con Caquetá y algunas zonas del sur del Tolima, en el alto Saldaña. En ellas se reproducen los conflictos propios de la colonización descritos anteriormente.

El norte del departamento del Cauca constituye, sin duda, la zona más crítica entre las ante-

riorios. Allí reside una de las mayores concentraciones de población indígena del país, conformada por comunidades de paeces, guambianos, coconucos y yanagons, principalmente. Desde tiempos coloniales, estas comunidades han debido enfrentar la presión de los terratenientes interesados en ocupar sus tierras. En épocas recientes, la presión no proviene tanto de las haciendas tradicionales del área payanesa como de la agroindustria que se expande desde el Valle del Cauca hacia el sur. Desde la década de los setenta, los indígenas, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), han librado una lucha pacífica dirigida a recuperar, mantener y ampliar las tierras de resguardo. Dadas las características de la población indígena, la lucha por la tierra adquiere, en esta zona, connotaciones muy particulares. Ya no se trata solamente de la apropiación de la tierra como recurso económico sino que ella implica, además, un requisito indispensable para preservar y fortalecer formas autónomas de organización social, política, económica y cultural. En esta lucha, los indígenas deben enfrentar dos adversarios: por un lado, están los terratenientes, tradicionales o modernos, que han ocupado o buscan ocupar las tierras de resguardo; por el otro, está el Estado, que secularmente ha desconocido los derechos económicos, culturales y políticos de las minorías étnicas en el país. Los primeros han organizado bandas de "pájaros" a su servicio buscando aniquilar selectivamente a los líderes de la organización indígena. El Estado, por su parte, ha ejercido sistemáticamente la represión contra todo intento de organización, movilización o lucha proveniente de este sector (14).

Algunos grupos de población indígena han respondido a esta agresión sistemática apelando a la vía de las armas. Desde mediados de la presente década surgió en el Cauca un nuevo grupo guerrillero: el Comando Quintín Lame. Otras organizaciones guerrilleras tales como el M-19, las FARC y el ELN han desarrollado en esta misma subregión una fuerte actividad armada. Sin embargo, sus relaciones con la población indígena no han estado exentas de profundas dificultades e incluso enfrentamientos.

14. Alejandro Reyes y otros, 'Conflictos rurales y derechos humanos en Colombia', en Derechos humanos en las zonas rurales. Bogotá, CIJ-ILDIS, 1979.

tos, especialmente en lo que se refiere a las FARC y el ELN. Tal situación se debe al hecho de que tales organizaciones armadas han pretendido imponer su lógica y sus proyectos a una población que busca, ante todo, defender su autonomía tanto en términos culturales como políticos. El M-19 ha logrado mantener una fuerte presencia en la zona gracias a las relaciones de respeto y apoyo que ha establecido con la comunidad indígena en general y con el Comando Quintín Lame en particular.

Un conflicto con características similares al del norte del Cauca, pero con niveles menores de intensidad, se desarrolla en la zona indígena del Tolima que abarca los municipios de Coyaima, Natagaima y Ortega. En este último municipio se guardan los escritos que contienen la memoria de las luchas indígenas que se libraron bajo el liderazgo de Manuel Quintín Lame en el suroccidente colombiano durante los años treinta y cuarenta. El Tolima, casi en su totalidad, ha conocido una larga e intensa historia de luchas agrarias que se expresaron durante la violencia de los años cincuenta, y resurgieron después bajo la forma de guerrillas campesinas revolucionarias que dieron origen a las FARC. El departamento del Huila también fue notablemente afectado por la violencia de la década del cincuenta.

Las subregiones más afectadas en los últimos tres años por la acción armada de grupos guerrilleros son:

1. La zona nororiental del Cauca, particularmente afectada por las acciones del M-19, el Quintín Lame y en algunas ocasiones por las FARC, abarca las poblaciones situadas en el altiplano de Popayán, capital del departamento, Puracé, Coconuco, Cajibío, Piendamó, Caldono, Morales, Caloto, Santander de Quilichao y Buenos Aires. Todas pertenecen a la vertiente del río Cauca. En la parte alta de la Cordillera Central en su vertiente occidental, están las poblaciones indígenas de Totoró, Silvia, Jambaló y Toribío. Inzá y Páez, pertenecientes a la vertiente oriental de la Cordillera Central que se orienta hacia el Magdalena, están en la cuenca del río Páez. En el extremo norte del departamento del Cauca, colindando con el Valle, se encuentran cuatro municipios en la parte plana del río Cauca. Estos son: Corinto, Miranda, Puerto Tejada y Padilla;
2. Al sur del departamento, en la vertiente occidental de la Cordillera Central, en la cuenca del río Patía están San Sebastián, La Vega, La Sierra, Timbío, Bolívar y El Tambo. En el valle del río Patía se encuentran los municipios de Mercaderes, Patía y Balboa. Esta zona ha visto acciones armadas de las FARC, principalmente;
3. En la zona de colonización conocida como la Bota caucana, situada en la vertiente oriental de la Cordillera Central, el único municipio afectado por acciones de la guerrilla, en particular del ELN, es Santa Rosa, ubicado en cercanías al nacimiento del río Caquetá;
4. En el departamento del Valle, sobre el valle geográfico del río Cauca, los municipios afectados son: Jamundí, Candelaria, Cali, capital del departamento, Palmira, Yumbo, Guacarí, Buga, Yotoco, Tuluá y Andalucía. Esta subregión abarca no sólo la zona cañera más importante del país sino también uno de sus más activos centros industriales: el comprendido en el triángulo Cali-Yumbo-Palmira. Este ha sido teatro privilegiado de acción del M-19;
5. Al oriente del Valle, en las estribaciones occidentales de la Cordillera Central, los municipios afectados son: Florida y Pradera al sur del departamento y Sevilla al norte;
6. En las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental, al noroeste de Cali, se encuentran las poblaciones de Riofrío, Bolívar, Roldanillo, Dagua, La Cumbre, Restrepo, Trujillo y El Dovio. Allí se han presentado acciones tanto del M-19 como del ELN.
7. En el departamento del Tolima, sobre la vertiente oriental de la Cordillera Central se encuentran, de sur a norte, los siguientes municipios afectados recientemente por acciones guerrilleras: Planadas, Rio Blanco, Chaparral, San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Cajamarca e Ibagué. Esta subregión ha sido escenario de acciones armadas por parte de las FARC y el M-19.
8. Sobre el valle del río Magdalena, están las poblaciones indígenas de Natagaima, Coyaima y Ortega. Sobre el mismo valle, en

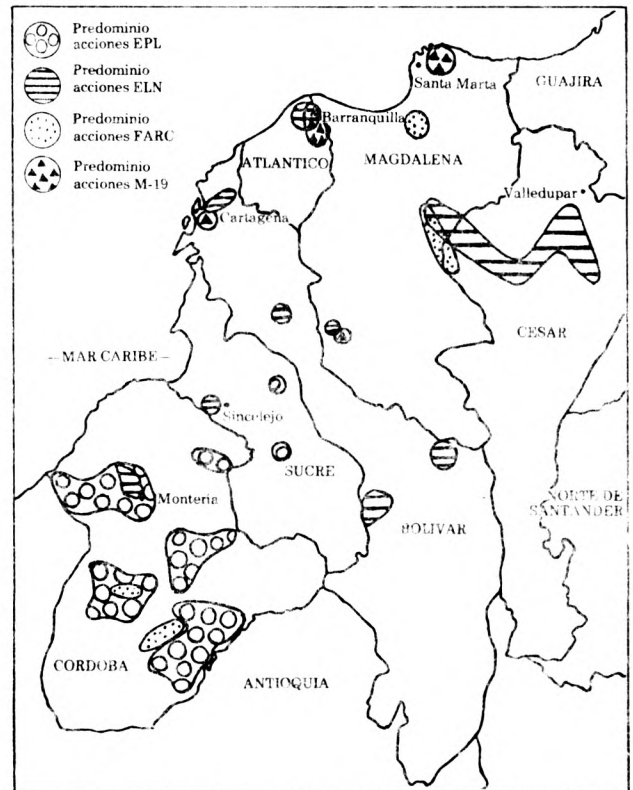
la parte norte está Mariquita, y El Guamo hacia el sur;

9. En las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental están los municipios de Alpujarra, Villarrica, Cunday e Icononzo. Esta subregión es zona de tránsito entre los departamentos de Tolima, Cundinamarca y el Meta, tradicionalmente caracterizada por la presencia de las FARC;
10. Al sur del departamento del Huila, sobre las estribaciones orientales de la Cordillera Central en la herradura que forma con la Cordillera Oriental, donde nace el río Magdalena, se encuentran los siguientes municipios afectados por acciones del ELN y las FARC: San Agustín, Isnos, Palestina, Pitalito, Acevedo y Suaza. Siguiendo por las estribaciones de la misma cordillera, hacia el norte, están las poblaciones de la Argentina, La Plata, Tesalia y Palermo, y
11. Sobre el valle del alto Magdalena al sur de Neiva, capital del departamento, se encuentran los municipios de Garzón, Gigante y Rivera. Al norte de esta ciudad, también en el valle del Magdalena están Tello, Baraya, Aipe y Villavieja. A lo largo del valle se han encontrado, recientemente, importantes yacimientos petrolíferos. Al oriente del valle, sobre la vertiente occidental de la Cordillera Oriental están los municipios de Algeciras y Colombia.

MAPA No. 6

REGION: COSTA ATLANTICA

Subregiones afectadas por operaciones armadas de la guerrilla (1985-1987)



Fuente: Elaborado con base en información del archivo del Instituto.

VI. Costa Atlántica (Ver Mapa No. 6)

Los diez millones de hectáreas de las llanuras del Caribe tienen un enorme potencial agrícola desaprovechado, que podría cubrir una superficie de 4.5 millones de hectáreas (15). Actualmente, la llanura está dedicada a la ganadería extensiva y sólo algunas áreas reducidas a los cultivos campesinos y a la agricultura comercial del algodón, arroz, sorgo y palma africana. Este mal uso del suelo es el resultado histórico del antiguo establecimiento de haciendas esclavistas que desplazaron el poblamiento indígena, y de la subordinación del campesinado al proceso de expansión de las ganaderías, mediante el sistema de tala y quema del bosque, los cultivos nómadas de subsistencia y la siem-

bra de pastos al servicio de los propietarios de la tierra. Al final del proceso el resultado es la alta concentración y subutilización de la tierra y la existencia de un amplio sector de campesinos desposeídos.

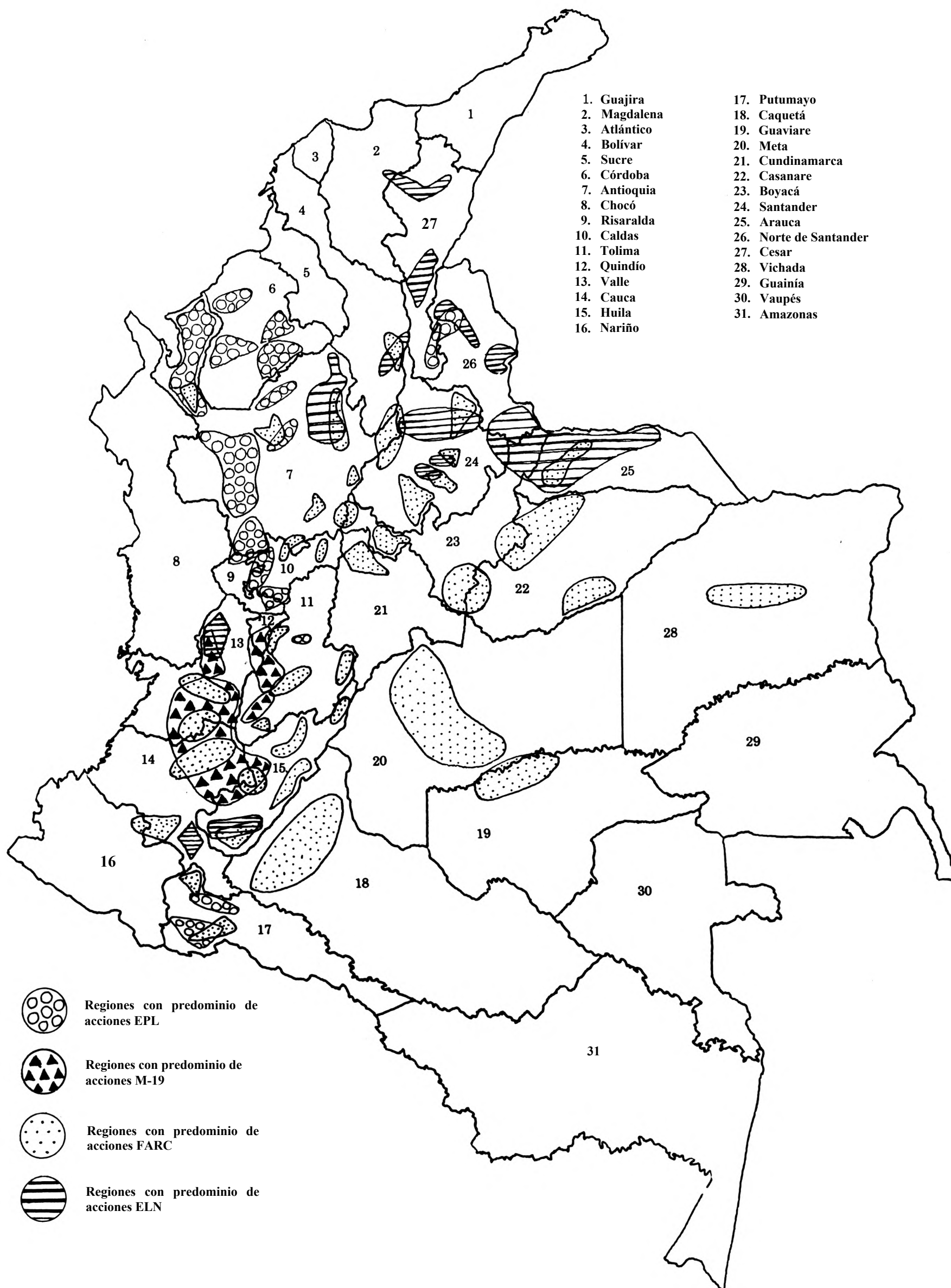
Los conflictos agrarios en la Costa Atlántica corresponden a la fase de destrucción del latifundio de tipo feudal, para permitir la conformación de la producción campesina con acceso directo a la propiedad de la tierra. Durante los años sesentas, los grandes y medianos propietarios liquidaron el sistema de arriendos a cambio de la siembra de pastos y expulsaron masivamente a los campesinos, como reacción a los intentos de reforma agraria de la administración Lleras Restrepo. Los problemas de supervivencia resultantes explican la radicalización de la organización campesina, ANUC, y

15. Abdón Cortés Lombana, Geografía de los suelos de Colombia, Bogotá, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, 1982, p. 94.

REGIONES AFECTADAS POR ACCIONES GUERRILLERAS.

AÑOS: 1985, 1986 Y 1987

(Excluye acciones en las grandes ciudades)



el movimiento de invasiones de haciendas que permitió reasentar una modesta proporción del campesinado en la tierra (16).

El movimiento campesino de la Costa fue denotado por los terratenientes en la segunda mitad de los años setenta, el reparto estatal de tierras fue paralizado y los líderes y activistas campesinos fueron perseguidos y muchos de ellos asesinados o encarcelados. El resultado de estos procesos fue la acentuación de las corrientes migratorias a los centros urbanos, la profundización de la pobreza rural y el fortalecimiento de los frentes colonizadores en Urabá, el alto Sinú, las serranías del Abibe, San Jerónimo y San Lucas, la depresión momposina, las estribaciones de la Sierra Nevada y la Serranía de los Motilones.

Los conflictos armados son de dos tipos: la presencia guerrillera en algunas áreas de colonización y la masiva creación de grupos paramilitares en las regiones dominadas por haciendas, especialmente en Córdoba, Magdalena y el Cesar. Notablemente, en las regiones densamente pobladas por campesinos sin tierra organizados no hay presencia de grupos guerrilleros.

Un fenómeno reciente en la Costa es la inversión de los narcotraficantes en compra de haciendas, con preferencia en Córdoba (cerca del 30% de la tierra de latifundios, según algunos estimativos locales), Magdalena y Cesar. Este hecho refuerza la tendencia de los grandes propietarios a crear grupos armados y gestionar matanzas en áreas campesinas.

La presencia guerrillera en la Costa Atlántica es fuerte en Córdoba, el sur de Bolívar (estribaciones de la Serranía de San Lucas), Cesar y Magdalena (sur de la Sierra Nevada de Santa Marta). Hay una presencia incipiente en los puertos sobre el Caribe (Cartagena, Barranquilla y Santa Marta) y sus áreas de influencia. El resto de la región carece de presencia guerrillera.

Las subregiones costeñas donde ha habido acciones guerrilleras son:

1. Las estribaciones de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, que dan origen a

los ríos Sinú y San Jorge, al sur del departamento de Córdoba. Esta es una región de colonización y explotación maderera limítrofe con el norte de Antioquia, con notable influencia de hacendados provenientes de ese departamento. Incluye los municipios de Tierralta y Valencia, situados entre las serranías de Abibe, que divide a Córdoba de Urabá, y de San Jerónimo. Puerto Libertador está situado en las estribaciones orientales de la Serranía de San Jerónimo; Montelíbano está al norte de la Serranía de Ayapel, junto al río San Jorge. En jurisdicción de este municipio están las instalaciones de explotación del yacimiento de níquel de Cerromatoso, el segundo gran proyecto minero del país después del carbón de El Cerrejón (Guajira). En estos municipios actúa el Ejército Popular de Liberación, EPL;

2. En la subregión bajo influencia de Montería, en el centro del departamento de Córdoba, ha habido operaciones del EPL en Montería, junto al río Sinú; en Planetarrica y Pueblo Nuevo, situados al sureste de Montería; en Canalete y Los Córdoba, municipios situados cerca de la costa del mar Caribe, al lado derecho de Arboletes (Urabá). Finalmente Sahagún, al nororiente de Montería, situado al extremo sur de las antiguas sabanas de Bolívar. En esta subregión hubo a comienzos de los años setenta una fuerte movilización campesina por la recuperación de la tierra, con influencias ideológicas de los activistas antioqueños del PC-ML (Partido Comunista Marxista-Leninista);
3. En las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta ha habido acciones del ELN en Fundación, en la parte plana junto a la vertiente occidental de la Sierra; en Ciénaga, al sur de Santa Marta y al occidente de la Sierra Nevada, en inmediaciones de la Ciénaga Grande de Santa Marta; en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena; y en Valledupar, capital del Cesar y situada al oriente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Las estribaciones al sur de la Sierra Nevada son un frente de colonización y las tierras bajas del Magdalena tienen predominio de latifundios ganaderos, cuyo monopolio de la tierra genera movilizaciones campesinas que intentan la invasión de áreas inexplotadas de las haciendas;

16. Alejandro Reyes Posada, Latifundio y poder político, "formación de las haciendas en Sucre, Bogotá, CINEP, 1976.

4. La subregión del departamento del Atlántico ha visto operaciones guerrilleras en Barranquilla, la capital, puerto sobre el Atlántico; en Soledad y Sabanalarga, al sur de Barranquilla y junto al río Magdalena; en Galapa, al suroeste de la capital; y en Manatí, al sur del departamento, situado cerca de la confluencia del río Magdalena y el Canal del Dique;
5. En el departamento de Bolívar, excluyendo la zona del Magdalena Medio ya mencionada, ha habido acciones del ELN en municipios distanciados entre sí: en San Mártir, de Loba, situado junto al Brazo de Loba que se desprende del río Magdalena; en el municipio de Achí, puerto sobre el río Cauca, junto al extremo noroccidental de la Serranía de San Lucas; en San Jacinto, sobre la serranía del mismo nombre, al norte del departamento; en Cartagena, la capital del departamento, y en Santa Rosa, al oriente de la capital; y
6. Finalmente, en el departamento de Sucre ha habido acciones del ELN en Sincelejo, la capital, situada al oriente del Golfo de Morrosquillo y al sur de la Serranía de San Jacinto; en San Pedro, al suroriente de la misma serranía; y en San Benito Abad, situada junto al río San Jorge, que desemboca en el Brazo de Loba, en la depresión momposina. En Sucre tuvo lugar la movilización campesina más fuerte y organizada del país en los años setenta, que logró recuperar para los agricultores cerca de 45.000 de las 850.000 hectáreas en manos de latifundistas.

CONCLUSIONES

Los campesinos sin tierra y los colonos, los indígenas, los trabajadores agrarios y muchos grupos de refugiados por violencia en las ciudades están colocados frente al dilema de dos conflictos: las luchas entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas, por una parte, y las luchas sociales en las cuales los adversarios están cada vez más dispuestos a usar instrumentos de fuerza, por otra. El problema central de la violencia en Colombia, desde el punto de vista popular, es ese dilema: ¿son las luchas guerrilleras la expresión armada de grupos populares para resolver mediante la guerra sus conflictos sociales? O, por el contrario, ¿son las guerrillas

el resultado de estrategias surgidas de la voluntad de pequeñas minorías que han asumido la tarea de pensar, decidir y actuar por el pueblo? ¿Es la lucha armada una lucha social? O, por el contrario, ¿interfiere con la lucha social?

No es fácil decidirse por una u otra respuesta. Si se juzga por la información estudiada en este artículo, puede concluirse que en todas las regiones donde hay luchas guerrilleras hay también situaciones de conflicto no intervenidas sustancialmente por el Estado en favor de las mayorías campesinas. El conflicto agrario más extendido geográficamente y donde se concentran las acciones de las FARC es la colonización. Le sigue en importancia el conflicto de las comunidades campesinas e indígenas minifundistas andinas, que viven situaciones de estancamiento y descomposición, amenazadas por el avance de la agroindustria y la ganadería. Es el caso de la región suroccidental y de buena parte de la nororiental, e incluso de la región cafetera, que involucran al M-19, el ELN, el EPL y las FARC. El tercer tipo de conflicto es el que viven los campesinos sin tierra en áreas de latifundios, común en la Costa Atlántica, donde actúan el ELN y el EPL. En cuarto término, el conflicto de los trabajadores agrícolas contra los empresarios bananeros en Urabá, al cual están vinculados el EPL y las FARC. Finalmente, hay conflictos dispersos entre la población y las empresas que adelantan desarrollos petroleros, mineros (esmeraldas, oro, carbón y níquel) e hidroeléctricos en Boyacá, Arauca, Santander, Putumayo, Cesar, Guajira, Antioquia y Córdoba.

El impacto de las guerrillas en cada uno de los conflictos enunciados es heterogéneo y a veces contradictorio. En el caso de la colonización, la guerrilla es una forma de poder, e incluso de orden policivo, que sustituye el que no ejerce el Estado; la guerrilla disuade a los grandes propietarios de expandir las ganaderías sobre parcelas campesinas; la presencia guerrillera, no obstante, hace vulnerable a la población a prácticas autoritarias de manipulación y a las retaliaciones de las Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares.

En los conflictos entre las comunidades minifundistas campesinas o indígenas y los grandes propietarios o el Estado hay diversidad de situaciones. El caso de los indígenas del Cauca

es ilustrativo. Luego de décadas de agresión armada surgió el Comando Quintín Lame para defender las luchas por la tierra y la autonomía. Otras guerrillas como las FARC y el ELN entraron en conflicto con las comunidades al pretender liderar su movimiento social sin respeto por sus formas propias de organización y sus normas culturales. En el nororiente el ELN fortalece la capacidad de presión de los campesinos frente al Estado pero a la vez los somete a la represión oficial y privada. Los sabotajes contra el oleoducto son un arma de negociación para lograr que se reinvierta localmente una parte de los beneficios del petróleo y en tal sentido, mejoran la legitimidad popular de la guerrilla en ciertas regiones. Sin embargo, los daños económicos y ecológicos que ocasionan tienen un alto costo político para la guerrilla y afectan negativamente a las comunidades locales al disminuir regalías y deteriorar el medio ambiente.

Las luchas sindicales en Urabá han sido apoyadas por grupos como el EPL y las FARC, con lo cual los trabajadores han logrado mejoras sustanciales en sus condiciones de vida, al costo de la radicalización violenta de algunos empresarios y de las Fuerzas Armadas, que han emprendido acciones legales e ilegales de represión contra ellos.

En suma, en favor de la segunda respuesta, que enfatiza la interferencia de las luchas guerrilleras en los movimientos sociales, están dos hechos: uno, que en algunas regiones las guerrillas ejercen relaciones autoritarias sobre la población indígena y campesina, aplicando un código simple que sanciona con la expulsión de la zona o la pena de muerte, sin crear nuevas relaciones sociales más justas en forma estable; y dos, que donde operan las guerrillas se produce una subordinación de las luchas gremiales a la acción armada, relegando a segundo plano la lógica política del conflicto social y permitiendo o propiciando la criminalización de los grupos populares ante los ojos de sus adversarios y del Estado.

Además, hay dos procesos de descomposición del conflicto armado que complican la resolución de conflictos, sea por la fuerza o por medios políticos: primero, la tendencia de algunos frentes guerrilleros a convertirse en delincuencia organizada, que reduce sus acciones a la

extorsión como medio de vida; segundo, el surgimiento de grupos paramilitares, que inician operaciones contrainsurgentes pero degeneran fácilmente en organizaciones delictivas.

La confusión entre adversarios sociales y enemigos armados, cuando las Fuerzas Armadas o los paramilitares lo hacen con la población campesina, o cuando las guerrillas lo hacen con los campesinos, los propietarios o capas medias y altas, lleva a una interferencia creciente entre los conflictos sociales y la violencia, situación en la cual la tendencia resultante es el escalamiento de la guerra. Los adversarios sociales se transforman en enemigos armados, por razones defensivas que fácilmente se tornan en contraofensivas.

La paz es el proceso contrario: la transformación de los antagonistas armados en adversarios sociales, que reconocen un campo común de relaciones y controvierten intereses por medios políticos.